

nalizarse en el mismo día. Parece que no debe haber en esto inconveniente, puesto que no está prohibido; pero el Juez de paz no deberá conceder esas dilaciones, sino cuando las considere de absoluta necesidad para conseguir la avenencia de las partes, que es el objeto de estos actos. Así se ha practicado hasta ahora, y es lo que parece mas conforme con el espíritu de la Ley.

Por último, no estará demás advertir, que dicho libro se titulará de *actas de conciliación*; deberá ser de papel del sello 4.<sup>o</sup> (1), abonando las partes el importe del que se invierta á su instancia, como se dirá en el comentario del art. 216; se extenderán en él las actas de conciliación, y las diligencias de que habla el artículo siguiente, por su orden cronológico, ó sea por el que se vayan celebrando, las unas á continuacion de las otras, sin dejar espacio alguno en blanco; con referencia al mismo libro se librarán las certificaciones de que habla el artículo 215; lo conservará el secretario bajo su responsabilidad, y al fin de cada bienio se hará entrega de él al juzgado de primera instancia (2).

## ARTÍCULO 214.

*En el libro de que habla el artículo anterior se hará constar por diligencia que suscribirán el Juez de paz y los concurrentes, haberse dado por terminado el acto de la conciliación á que no hayan concurrido los interesados ó alguno de ellos, y la entidad de la multa que se les haya impuesto por su falta de asistencia.*

En el comentario anterior hemos explicado el modo de redactar y extender el acta de la conciliación, cuando tiene lugar el acto por haber comparecido todos los interesados: en el presente diremos lo que debe hacerse cuando no concurren estos ó alguno de ellos. Aunque el Reglamento provisional (art. 26) y la ley de 3 de Junio de 1821 (art. 9) ordenaron que cuando á la segunda citación no compareciese el demandado, el alcalde diera por terminado el acto, franqueando certificación al demandante de haberse intentado el medio de la conciliación, y de no haber tenido efecto por culpa del demandado, y declarando á éste incurso en la multa con que se le hubiere conminado, no prescribieron que esto se hiciese constar en el libro de juicios de conciliación. De aquí resultó que por regla general no se acreditaba, quedando ilusoria la multa; y si el demandante no pedía la certificación en el acto, pasado algun tiempo se tropezaba con el inconveniente de haber perdido la memoria exacta de los hechos, y se veía precisado á intentar de nuevo la conciliación si queria acudir á la vía judicial. La nueva Ley no podía dejar subsistentes estas prácticas abusivas, y las ha cortado por el artículo que estamos comentando, mandando que en el libro de actas de conciliación se haga constar por diligencias, que suscribirán el Juez de paz y los concurrentes, haberse dado por terminado el acto de la conciliación á que no hayan concurrido los interesados ó alguno de ellos, y en la entidad de la multa que se les haya impuesto por su falta de asistencia. También deberá hacerse constar la condenación de costas al que no haya concurrido, de que habla el art. 209, que podrá verse con su comentario.

Se deduce de lo dicho, que en el libro de actas de conciliación se ha de hacer constar el resultado de cuantas se hubiesen intentado, una vez hecha la citación para el acto, el Juez de paz y el secretario faltarían á su deber, si no acreditaran en el libro el resultado que hubiere tenido, entendiendo el acta en la forma dicha en el comentario anterior, cuando comparezcan todos los interesados, y poniendo la diligencia antes expresada, cuando no comparezcan, ó cuando deje de concurrir alguno de ellos, ya sea el demandante ya el demandado. Esta diligencia será firmada por el Juez de paz, la parte que hubie-

1. Art. 18, núm. 5.<sup>o</sup> del Real decreto de 8 de Agosto de 1851.

2. Arts. 12 y 13 del Real decreto de 22 de Octubre de 1855.

se concurrido, su hombre bueno y el secretario; y por aquel y este únicamente, cuando no concurra ninguno de los interesados ni de los hombres buenos.

Aunque no lo dice la Ley espresamente, es de inferir que el Juez de paz tiene el deber de procurar que se haga efectiva la multa y tambien las costas. Al intento, el secretario habrá de requerir á la persona condenada para que las abone, y si no las paga desde luego, procederá á su exacción breve y sumariamente ó por la vía de apremio, á cuyo fin se librará certificación de la diligencia anterior para que sirva de cabeza del expediente. Si el condenado en la multa gozara de fuero especial, esta certificación habrá de remitirse á su Juez respectivo con oficio del de paz para que se la exija, y devuelvan las diligencias en que se acredite con el correspondiente papel de multas unido á las mismas, conforme á lo que hemos dicho en el comentario del art. 209; esto mientras no se lleve á efecto la unidad de fueros, ó se disponga otra cosa. Convendrá, por último, que el secretario acredite por nota en el libro de actas de conciliación al margen de cada diligencia, que se hizo efectiva la multa, con espresion del número que le haya correspondido en el registro que debe llevarse. El papel del importe de la multa quedará unido al expediente que corresponda, y si no lo hubiere se archivará; todo como lo dispone el art. 47 del Real decreto de 8 de Agosto de 1851.

## ARTÍCULO 215.

*Se dará certificación al interesado ó interesados que la pidan del acta de conciliación, ó de no haber tenido y dádose por terminado en los casos de no comparecer los interesados ó alguno de ellos.*

Ya hemos dicho en los comentarios anteriores, particularmente en el del art. 203, que no puede admitirse demanda alguna á que no se acompañe certificación del acto de conciliación, ó de haberse intentado sin efecto, en los casos en que por derecho corresponda; y que basta para que se tenga por intentado el acto, el que se haya verificado la citación, aun cuando luego sea el demandante el que no comparezca. Aquel precepto supone en los interesados el derecho de reclamar dicha certificación; mas, para evitar toda duda, manda el artículo que estamos examinando, que se dé certificación al interesado ó interesados que la pidan del acta de conciliación, ó de la diligencia en que se haya hecho constar que no ha tenido efecto y se ha dado por terminado el acto por no haber comparecido los interesados, ó alguno de ellos. De lo cual se deduce que lo mismo puede pedir la certificación el demandante que el demandado, y que cuando la pida cualquiera de ellos, el Juez de paz no puede negarse á mandar que se les facilite. Pero no deberá darse á cualquiera otro, que no sea alguno de los interesados, sin que preceda mandamiento judicial, lo mismo que está prevenido para toda clase de actuaciones judiciales, y tambien respecto de los contratos, con los cuales tanta analogía tienen hoy estos actos.

Antes de la presente Ley los alcaldes eran los que libraban estas certificaciones; porque ellos solos y sin intervencion de secretario autorizaban los juicios de conciliación. Hoy debe variar esta práctica; siendo el secretario del Juzgado de paz el encargado de llevar los libros de actas de conciliación (art. 213), y debiendo conservarlos bajo su responsabilidad (1), es consiguiente y conforme á la práctica de nuestros tribunales y oficinas públicas, que él sea tambien el que libre tales certificaciones; pero siempre de orden del Juez de paz, en cuyo crédito y para mayor autorización será conveniente que éste ponga el V.<sup>o</sup> B.<sup>o</sup> en las mismas. *Se dará certificación*, dice el artículo que estamos comentando, sin espresar quién la dará, y en su silencio parece lo mas conforme que se establezca la práctica que acabamos de indicar. (Véanse los formularios.)

1. Art. 12 del Real decreto de 22 de Octubre de 1855.



Réstanos solo indicar, que la certificación ha de ser literal de lo que resulte del libro de actas de conciliación, con referencia al cual se librará; y se ha de estender en papel del sello cuarto, como lo dispone el art. 18, núm. 5º del Real decreto de 8 de Agosto de 1851.

## ARTÍCULO 216.

*Los gastos que ocasione la conciliación serán de cuenta del que la promueva: los de las certificaciones, del que las pidiere.*

El precepto de este artículo es claro, y se funda en que siendo el acto de conciliación un medio preparatorio del juicio, los gastos que ocasione deben ser de cuenta del que lo inste, del que lo promueva, como lo son todos los que se originan para reunir los documentos que han de acompañarse á la demanda: por identidad de razón, los gastos de los certificaciones han de ser de cuenta de quien las pida. Mas, todo esto debe entenderse sin perjuicio de la condenación de costas que pueda haber en el pleito: si el demandado fuere condenado al pago de todas las causadas, natural es que en ellas se comprendan también las de la conciliación, á la que él mismo dió lugar por no haber satisfecho oportunamente sus compromisos y obligaciones.

La primera parte de este artículo no puede tener aplicación sino en el caso de que haya tenido efecto el acto de conciliación, puesto que cuando no lo tenga por no haber concurrido alguno de los interesados sin justa causa, debe ser condenado al pago de las costas el que hubiere dejado de concurrir, como terminantemente lo dispone el artículo 209. Cuando haya avenencia se pagarán las costas en la proporción que convengan las partes, y si nada hubiesen resuelto sobre esto, las pagará el demandante con sujeción al artículo que estamos examinando. La práctica antigua en tal caso era la de pagarse por mitad entre ambas partes, y esto parece lo mas justo.

Dúdase acerca de los derechos que corresponderán á los funcionarios que intervienen en las actuaciones para la conciliación. Diremos nuestro parecer. Los jueces de paz no deben exigir derechos, porque no los tenían antes los alcaldes, y porque su cargo es gratuito (1). Los secretarios podrán exigir los correspondientes al auto, notificaciones y demás diligencias que autoricen ó practiquen para la citación, si bien con la rebaja ó modificaciones que hemos indicado en las observaciones que al principio de este tomo hacemos á las disposiciones legislativas referentes á los juzgados de paz; y además por la estension del acta, únicamente los dos reales que marca el art. 321 de los aranceles judiciales vigentes. Y á los porteros corresponderán también los de las diligencias que se les encarguen. Todos estos derechos y el importe del papel sellado que se invierta para estender el acta en el libro, constituyen los gastos de la conciliación.

## ARTÍCULO 217.

*Contra lo convenido en el acto de conciliación solo se admitirá la demanda de nulidad. Procederá ésta únicamente por las causas que dan lugar á la nulidad de los contratos.*

*Deberá interponerse ante el Juez de primera instancia del partido dentro de los ocho días siguientes al de la celebración del acto.*

*Esta demanda seguirá la tramitación del juicio ordinario.*

Este artículo contiene otra de las reformas, acaso la mas importante, que la nueva Ley de Enjuiciamiento ha hecho en la jurisprudencia que venia rigiendo sobre esta

1. Art. 3º del Real decreto de 22 de Octubre de 1855.

materia. El Reglamento provisional (art. 24) y la ley de 3 de Junio de 1821 (art. 8º) habian ordenado que el mismo alcalde ó Juez de paz llevara á efecto lo convenido en el juicio de conciliación *sin escusa ni tergiversacion alguna*; de lo cual se deducia lógicamente que no podia admitirse ningun recurso contra la ejecución de tales convenciones. La esperiencia habia hecho conocer, y la razón dictaba lo absurdo de este procedimiento, por las injusticias que ocasionaba, y por su inconsecuencia con los principios en que debía estar basado; la nueva Ley, por lo tanto, no podia dejarlo subsistente. En la exposición de motivos de la misma, que ya hemos citado, explica el Sr. Gomez de la Serna los que la Comisión encargada de redactar la Ley ha tenido para introducir esta reforma.

“El principio absoluto, dice, que viene rigiendo de que no haya recurso contra lo que del acto de conciliación resulte, es absurdo, es insostenible. La conciliación, en último resultado, es solo un pacto, una transacción, y en este concepto está sujeta á todas las condiciones que las leyes establecen para la fuerza de las obligaciones. Si la transacción es nula por falta de capacidad legal en la persona que la otorga, si ha sido arrancada con violencia, ó efecto de una sorpresa preparada por artificio, ó si tiene cualquiera de los otros defectos que suponen falta de voluntad en el que se obliga, ¿es justo, es moral que sea irrevocable lo que un demandante astuto, prevaleciéndose tal vez de la parcialidad, de la ignorancia, ó de la falta de entereza de un Juez de paz, haya preparado en daño de su contrario? ¿No debe proceder en estos casos la demanda de nulidad, igualmente que procedería contra una escritura de transacción?”—Estas razones nos servirán de base para la buena inteligencia del artículo que estamos comentando, y para resolver las dudas y dificultades que puedan ocurrir en su aplicación.

De poca utilidad serian los actos de conciliación si la Ley no diera fuerza ejecutiva á los convenios en ellos celebrados, igual á la de cualquier otro convenio consignado en escritura pública, y con preferente procedimiento por la solemnidad y mayor valor que les dá la intervención de la autoridad. Por eso deben llevarse á efecto por los trámites prevenidos para la ejecución de las sentencias, sin que pueda estorbarse esta ejecución por otra causa que no sea la nulidad de la misma convención. “Contra lo convenido en el acto de conciliación solo se admitirá la demanda de nulidad,” dice dicho artículo; y el adverbio *solo* excluye la admisión de cualquiera otro recurso, de modo que por ninguna causa puede impedirse dicha ejecución como no sea la demanda de nulidad.

Y ¿por qué causas procederá esta demanda? El mismo artículo nos lo dice: “*únicamente por las causas que dan lugar á la nulidad de los contratos.*” No pueden admitirse otras, y esto es lo lógico y conveniente: porque considerada la avenencia tenida en la conciliación como un pacto ó una transacción solemne, cual debe considerarse, es consiguiente que se sujete á todas las condiciones que las leyes establecen para la fuerza de las obligaciones y contratos. La Ley de Enjuiciamiento no ha tenido por conveniente especificar esas causas, considerándolo quizás ajeno de su competencia; no ha hecho mas que sentar el principio, refiriéndose para su aplicación á las disposiciones del derecho civil, que será necesario tener presentes.

Las leyes exigen ciertos requisitos para la validez de todo contrato, que por eso se llaman esenciales; estos requisitos son: 1º el consentimiento; 2º la capacidad de los contratantes; 3º cosa cierta, posible y permitida; 4º causa lícita de la obligación. La falta de cualquiera de estos requisitos produce la nulidad de todo contrato y de consiguiente también la nulidad de lo convenido en el acto de la conciliación.

1º El consentimiento.—Este ha de ser libre y espontáneo, y prestado con conciencia de lo que se hace. No será, pues, válido cuando se preste en virtud de documentos falsos, ó por error, ó cuando sea arrancado por violencia, intimidación, ó dolo. Hay error,